

SEPTIEMBRE 23 de 1921

51.^a REUNIÓN — 46.^a SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GOYENECHÉ, SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE
Y VERGARA

DIPUTADOS PRESENTES: Agesta Enrique, Agüero Vera J. Zacarías, Albarracín Francisco L., Aldao Ricardo, Anastasi Leonidas, Andreis Fernando de, Ancillo Arturo, Aranda Macedonio, Arámburu Juan B., Aráoz Miguel A., Arnedo Rodolfo, Astrada Manuel J., Avellaneda Marco A., Bary Alberto de, Bas Arturo M., Beguiristain Manuel B., Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Berrondo Valentín, Bravo Mario, Bréard Eugenio E., Carbera Aníbal, Cabrera Enrique, Caracoche Pedro, Cárcano Ramón J., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini Alberto H., Casás José O., Ceballos Mariano P., Cortínez Domingo, Costanti Gerardo, Correa Francisco E., Costa Julio A., Cristobo Gumersindo L., Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Demaría Mariano (hijo), Díaz de Vitar Ramón, Dickmann Enrique, Dussaut Rubén, Echagüe Alfredo, Escobar Adrián C., Fernández Daniel, Fernández Jacinto, Ferrarotti Juan L., Ferreyra Andrés (hijo), Fox Pedro A., Francioni Isaac, Frugoni Juan José, Gallardo Manuel, Gallegos Moyano C., Gatica Teófilo I., Gil Matías, González Iramain Héctor, González José Antonio, González Zimmermann A., Goyeneche Arturo, Grau José M., Güerci Luis, Guido Mario M., Hernández Subá Z., Justo Juan B., Landaburu Laureano, Leguizamón Arturo, Lencinas Carlos Washington, López Héctor S., López Anaut Pedro, Lozano Antonio, Maidana Julián, Martínez Benigno, Martínez Enrique, Martínez José Heriberto, Martínez José M., Massoni José S., Méndez Casariego Alberto, Míguez Edgardo J., Miñones Alejandro, Molina Víctor M., Mora y Araujo Manuel, Moreno Julio del C., Mouesca Eduardo, Muzio Agustín S., Noriega José Víctor, Núñez Pedro R., O'Farrell Juan A., Olmos José T., O'Reilly Guillermo R., Ortíz Roberto M., Otamendi José A., Padilla Ernesto E., Parodi Silvio E., Parry Roberto, Peña Manuel, Pereyra Rozas Ricardo, Pérez Virasoro E., Pinedo Federico (hijo), Pintos Angel, Pradère Carlos M., Quinteros Eduardo F., Quiroga Marcial V., Quirós Herminio J., Raffo de la Reta J. C., Remonda Mingrand F., Repetto Nicolás, Riú Francisco A., Rodeyro José León, Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge R., Rothe Guillermo, Rougés León, Rubilar Francisco, Saccone Romeo D., Sánchez de Bustamante T., Sánchez Sorondo M. G., Santa María Arturo, Santamarina Antonio, Solanet Pedro, Tamborini José P., Tierney Juan S., Tomaso Antonio de, Tomaszewski Eduardo M., Valle Delfor del, Vergara Valentín, Villafañe Benjamín, Yolde Lauro; AUSENTES CON LICENCIA: Alemán Eugenio, Arana Eduardo, Aráoz José Luis, Avellaneda Nicolás A., Capurro Juan J., Celestia Ernesto H., Corvalán Santiago E., Gibert Pedro F., Isnardi Arturo, Lagos Joaquín, Laurencena Miguel M., Moral Ernesto M. del, Oliva Moisés J., Rodríguez Calixto A., Paz Alberto J., Vedia Mariano de, Vera Octaviano S.; AUSENTES SIN AVISO: Barrera Nicholson Antonio, Bunge Augusto, Cafferata Juan F., Lehmann Guillermo, Molinas Luciano F., Montes José A., Oyhanarte Raúl F., Robín Castro Napoleón, Taboada Diógenes, Usandivaras Agustín.

SUMARIO

1.—Se da por aprobada el acta de la sesión anterior.

2.—Asuntos entrados.

I.—Comunicaciones oficiales, despachos de comisión y peticiones particulares. Moción pendiente del señor diputado Aranda para tratar el asunto referente a intervención en la provincia de Salta

II.—Proyecto de ley del señor diputado González Zimmermann sobre empleos públicos

3.—Concédese licencia para faltar a sesiones al señor diputado Oliva

4.—Apruébase la moción del señor diputado Aranda de considerar inmediatamente las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de ley de intervención en la provincia de Salta. Consideración y aceptación de dichas modificaciones.

5.—Proyecto de resolución del señor diputado Repetto, aprobado, por el que se solicitan informes del poder ejecutivo respecto de la situación actual del país en materia de fletes ferroviarios

6.—Consideración y aprobación del despacho de la comisión especial de legislación penal respecto de las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de reformas al código penal.

7.—Consideración y aprobación del dicta-

men de la misma comisión en el proyecto de reformas del código de procedimientos en materia criminal.

- 8.—Termina la consideración del despacho de la comisión de comunicaciones y transportes, que es aprobado, en el proyecto del señor diputado Noriega sobre construcción de una línea de Huahuel Niyeo a Epuýen
- 9.—Consideración y aprobación del despacho de la misma comisión en el proyecto de ley del señor diputado Martínez (J. M.), sobre construcción de líneas telegráficas entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.
- 10.—Consideración del despacho de la comisión ya nombrada, en el proyecto de ley del poder ejecutivo sobre profundización de las rutas navegables en los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay.

—En Buenos Aires, a 23 de septiembre de 1921, siendo la hora 15 y 40, ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en quórum legal.

1

ACTA

Sr. Presidente (Goyeneche). — Queda abierta la sesión con asistencia de 90 señores diputados.

Se va a dar lectura de la sesión de ayer.

Sr. González (J. A.) — Hago indicación para que se suprima la lectura del acta y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Habiendo asentimiento se dará por aprobada.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicación del honorable senado

Devuelve con modificaciones el proyecto de ley pasado en revisión sobre intervención federal en la provincia de Salta.

Sr. Aranda. — Pido la palabra.

En la sesión de ayer la honorable cámara resolvió tratar sobre tablas y despachar aceptando, las modificaciones introducidas por el honorable senado al proyecto de ley relativo a la intervención en la provincia de San Juan. Viene ahora a conocimiento de esta cámara una modificación exactamente igual, introducida en el proyecto de ley de intervención a la provincia de Salta. Como esas modificaciones han sido aceptadas por la honorable cámara en la sesión de ayer, con respecto a San Juan, creo que sería el caso de proceder por una votación si se aceptan o rechazan las modificaciones del honorable senado. Eso me autoriza a pedir a la honorable cámara que trate sobre tablas y como primer asunto las modificaciones a que me refiero.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Cuando se termine de dar cuenta de los asuntos entrados se considerará la indicación del señor diputado por Salta.

Despachos de comisión

PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los proyectos de ley abriendo los siguientes créditos suplementarios; al departamento de obras públicas, por pesos m/n 40.016.72; 8.810.80; 8.911.91; 14.896.85; 111.483.77; 3.708.524.52; 70.556.86; al departamento del interior, por \$ m/n. 2.502.150.02; 15.729.63; 1.056.210; 1.691.000; 1.376.668.09; al departamento de agricultura, por \$ 247.685.77; m/n.

—En el proyecto de ley del señor diputado Méndez Casariego y otros por el que se acuerda subsidio a varias asociaciones rurales de Entre Ríos y Corrientes.

ción relativa al disgusto causado por estas medidas, expresado más o menos unánimemente por el comercio de todo el país. Y de esta nueva situación del transporte, comprometida y perjudicada por esta mala política ferroviaria, se hizo eco "El Avisador Mercantil", diario que se publica en esta capital, el cual el día 5 de septiembre, en un artículo relativo a este mismo asunto, trae, sintetizado su opinión, este breve párrafo que voy a leer: "Por poco que se ahonde en dicho asunto de las tarifas ferroviarias, se encontrarán argumentos incontestables para la justa censura de la actitud gubernamental, evidentemente equívoca en este caso frente a la inconsideración que entraña de hecho el gravamen". El comercio del país se sentió, como digo, molestado por este cambio de actitud del poder ejecutivo, y así lo manifestó en distintas formas. La Bolsa de Comercio de Córdoba delegó a esta capital una comisión de su seno para que se presentara al poder ejecutivo y lo denunciara las verdaderas extorsiones— ésta es la palabra que se empleó en la manifestación oficial que se hizo— las verdaderas extorsiones a que sometían al comercio en aquella provincia las distintas empresas ferroviarias que la sirven; y en una larga presentación hecha por estos señores de la Bolsa de Comercio de Córdoba, se daban datos comparativos que probaban que en realidad el transporte ferroviario para el comercio de aquella provincia es tan oneroso que iguala o supera el transporte de mercaderías que se hacen a mayores distancias.

El poder ejecutivo, en vista de la tormenta que iba levantando esta su nueva actitud en materia de tarifas, se dispuso a calmarla dictando su resolución de 8 de septiembre, por la cual el poder ejecutivo designa una comisión encargada de estudiar la situación efectiva de las tarifas ferroviarias, con el objeto de determinar si realmente las empresas de ferrocarriles habían hecho aumentos y si estos aumentos estaban autorizados por la dirección general de ferrocarriles.

Como la provincia de Córdoba es ahora teatro de una activa campaña electoral provocada por la próxima elección de gobernador, el poder ejecutivo prestó preferente atención al reclamo de sus comerciantes y dictó una resolución especial mandando ordenar una severa y rápida investigación para comprobar los cargos formulados por el comercio de Córdoba, a fin de que se pueda — dice la resolución del poder ejecutivo — "poner coto a las irregularidades cometidas por las empresas en la aplicación de las tarifas".

Y para que la tranquilidad volviera por completo al seno de los intereses perjudicados, el 18 de septiembre el poder ejecutivo hizo conocer por medio de la prensa oficial y oficiosa una nueva resolución, por la cual se declara que el poder ejecutivo mantiene en todos sus términos el decreto de 21 de agosto, es decir que las empresas deben devolver lo cobrado de más y sujetarse a las primitivas tarifas.

Ahora bien, este es el momento en que nadie sabe en el país a qué clase de tarifas estamos sometidos: si estamos sometidos a las tarifas con los aumentos producidos en los primeros meses de este año, o si volvemos a las viejas tarifas por mandato de la resolución del poder ejecutivo de fecha agosto 21. Hoy mismo, leyendo "La Prensa", me encontré con un telegrama procedente de Villa María, que dice lo siguiente: "Las tarifas ferroviarias. - Villa María septiembre 22. - Las empresas ferroviarias, a pesar del decreto del poder ejecutivo, por el cual se prohíbe el aumento de las tarifas y al mismo tiempo se obliga a la devolución de lo cobrado de más, se rehusan a hacer las devoluciones que marca el mencionado decreto".

De manera, pues, que no sabemos hoy en qué situación estamos en materia de tarifas ferroviarias, si se cumple o no se cumple el decreto de agosto 21, si el país está obligado a soportar los nuevos aumentos, o si el país tiene el derecho de volver a las viejas tarifas y de reclamar lo que ha pagado de más.

Para que esta situación se aclare, para que lo sepa el congreso, para que

sepa el país a qué atenerse en esta cuestión, es que me permito formular este pedido de informes al poder ejecutivo, que espero votará la cámara por unanimidad.

Ruego al señor secretario tenga la bondad de tomar nota del texto de mi pedido de informes, que es el siguiente:

"La honorable cámara de diputados, en ejercicio de un derecho institucional, se dirige al poder ejecutivo a fin de que se sirva informarla sobre un pretendido aumento de las tarifas ferroviarias puestas en vigencia por las respectivas empresas a principios del corriente año".

Nada más.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Está en consideración en general el pedido de informes solicitado por el señor diputado por la capital.

Se va a leer el texto.

—Se lee:

Sr. Presidente (Goyeneche). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión en particular.

Sr. Justo. — Pido la palabra.

Para proponer algunas modificaciones de forma.

En primer lugar que se diga simplemente "la cámara de diputados de la nación" y no "la honorable cámara"; es decir sin la palabra "honorable", porque no nos vamos a tratar en esa forma nosotros mismos.

Por otra parte, modifico la redacción en la siguiente forma: . . . a fin de que se sirva informarla sobre el aumento de las tarifas ferroviarias puesto en vigencia por diversas empresas durante el corriente año.

Son pequeñas modificaciones de redacción.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Acepta el señor diputado las modificaciones introducidas por el señor diputado Justo?

Sr. Repetto. — Sí, señor. . .

Sr. Pinedo. — Que se agregue a eso que el ejecutivo informe cuáles son las tarifas que rigen en la actualidad.

Sr. Noriega. — Pido la palabra.

Con respecto a la modificación que quería hacer el señor diputado Justo, ella está en contra del reglamento y pido que se lea el artículo 3.

—Se lee:

"Artículo 3.º — El tratamiento de la cámara será el de honorable, mas sus miembros no tendrán ninguno especial".

Sr. Justo. — Eso es cuando el ejecutivo se dirige a nosotros.

Sr. Demaría. — Sería como si el presidente empezase una comunicación diciendo "Mi excelencia". (Risas). El tratamiento se lo dan a uno, no se lo da uno.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a leer el pedido de informes.

—Se lee.

"La honorable cámara de diputados, en ejercicio de un derecho constitucional, se dirige al poder ejecutivo a fin de que se sirva informarla sobre el aumento de las tarifas ferroviarias puestas en vigencia por diversas empresas durante el corriente año".

Varios señores diputados. — Que se vote.

Sr. Demaría. — Yo voto en contra de lo de "honorable".

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Queda sancionado el pedido de informes.

Sr. Ferreyra. — Hago moción de que se pase a la orden del día.

—Se vota y resulta afirmativa.

6

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

(Orden del día número 183)

Sr. Presidente (Goyeneche). — La orden del día la constituye el proyecto venido en revisión del honorable senado sobre código penal.

Honorable cámara:

Vuestra comisión especial de legislación penal, ha considerado las modificaciones introducidas por el honorable senado, al proyecto de código penal que le fué pasado en revisión; y, por las razones expresadas en el adjunto informe, os aconseja lo siguiente:

a) No aceptar la inclusión de la pena de muerte en los artículos 5 y 80, del proyecto enviado en revisión por el honorable senado, ni los seis artículos agregados, reglamentarios de esa pena.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

Art. 5.º — Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Art. 80. — Se aplicará reclusión perpetua pudiendo ser relegado:

- 1.º Al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son.
- 2.º Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, sevicias graves, impulso de perversidad brutal, o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión, o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos.
- 3.º Al que matare a otro para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí, o para sus co-operadores, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 5.º — Las penas que este código establece son las siguientes: muerte, reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Art. 80. — Se aplicará la pena de muerte o de reclusión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52.

1.º Sin modificación.

2.º Sin modificación.

3.º Sin modificación.

Art. nuevo. — No se impondrá pena de muerte, cuando el hecho o sus circunstancias calificativas, resulten probadas solo por presunciones o por confesiones.

Art. nuevo. — Sólo podrá aplicarse la pena de muerte, cuando concurran las siguientes circunstancias:

- 1.º Que la causa haya sido vista en todos los juicios que establezca la respectiva organización judicial.
- 2.º Que en todas las instancias, se haya decidido la imposición de aquella pena.
- 3.º Que haya habido unanimidad de votos y tribunal pleno en los tribunales colegiados.
- 4.º Que el reo haya sido oído personalmente, en audiencia, por todos los

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA**SANCION DEL HONORABLE SENADO**

jueces y tribunales que dictaren sentencia.

Art. nuevo. — No se impondrá la pena de muerte a las mujeres, a los menores de edad y a los mayores de setenta años.

Art. nuevo. — La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, quien será asistido por el sacerdote, o ministro del culto, cuyo auxilio hubiera solicitado o aceptado.

El juez de la causa, hará constar la ejecución de la pena en una acta que se unirá al proceso. Esta acta y la sentencia se darán a la publicidad.

Art. nuevo. — La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar al día siguiente de la notificación de la sentencia irrevocable.

La notificación no podrá hacerse en vísperas de domingo, ni de fiesta religiosa o nacional.

Art. nuevo. — El cadáver del ejecutado será entregado a sus parientes dentro del segundo grado, si lo solicitaran al juez de la causa.

b) No aceptar las modificaciones introducidas a los artículos 6.º, 9.º, 10, 36, 37, 45, 114, 209 y 302.

Art. 6.º — La pena de reclusión perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase, con tal que no fueren contratadas por particulares.

Art. 9.º — La pena de prisión perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos.

Art. 10. — Cuando la prisión no excediera de seis meses, podrán ser detenidas en sus propias casas, las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias.

Art. 36. — No es punible el menor de 14 años.

Si las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente, o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso de-

Art. 6. — La pena de reclusión perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase, con tal que no fuesen contratadas por particulares. La reclusión temporal no será inferior a un año, ni superior a veinticinco años.

Art. 9. — La pena de prisión perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos. La prisión temporal no será inferior a cuatro días, ni superior a veinticinco años.

Art. 10. — Cuando la prisión no excediera de seis meses, podrán ser detenidas en sus propias casas, las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias. El juez podrá acordar lo mismo cuando se trate de personas de muy honestos antecedentes.

Art. 36. — No es punible el menor de catorce años. Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente, o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

jarlo a cargo de éstos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores, hasta que cumpla dieciocho años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres o guardadores.

Si la conducta del menor en el establecimiento donde estuviere, diese lugar a suponer que se trata de un sujeto pervertido o peligroso, el tribunal podrá, después de las comprobaciones necesarias, prolongar su estadía, hasta que tuviere veintiún años.

Art. 37. — Cuando el menor tuviese más de catorce años y menos de dieciocho, se observarán las siguientes reglas:

- a) Si el delito cometido tuviere pena que pudiera dar lugar a la condena condicional, el tribunal quedará autorizado para disponer la colocación del menor en un establecimiento de corrección, si fuese inconveniente o peligroso dejarlo en poder de los padres, tutores o guardadores, o de otras personas.

El tribunal podrá disponer esa colocación hasta que el menor cumpla veintiún años, pudiendo anticipar la libertad o retardarla hasta el máximo establecido, cuando el término fijado fuese menor, si resultase necesario, dadas las condiciones del sujeto.

- b) Si el delito tuviese pena mayor, el tribunal queda autorizado para reducirla en la forma determinada para la tentativa.

Art. 45. — Los que toman parte en la ejecución del hecho o prestaren al autor o autores, un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado *directamente* a otro a cometerlo.

Art. 114. — Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

Art. 209. — El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una per-

SANCION DEL HONORABLE SENADO

procederá con arreglo a lo establecido por la ley número 10903.

Art. 37. — Cuando el menor tuviese más de catorce años y menos de dieciocho, se observarán las siguientes reglas:

- a) Si el delito tuviese pena que pudiera dar lugar a condena condicional, el tribunal procederá con arreglo a lo que prescribe la ley número 10.903.

- b) El inciso b) no se modifica.

Art. 45. — Suprimir la palabra "directamente".

Art. 114. — Suprimir "en la capital y territorios nacionales".

Art. 209. — El que públicamente instigare a cometer un delito, será reprimido por la sola

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

sona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes a cuatro años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el art. 41.

Art. 302. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses, el que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero y siempre que no concurran las circunstancias del art. 172, un cheque o giro, sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto y no abonare el mismo, en moneda nacional de curso legal, dentro de las veinticuatro horas de haber sido protestado.

- c) No aceptar la agregación de los artículos 41 bis, 51 bis y 225 bis.

Art. 41 bis. — Cuando los delitos previstos en los artículos 209, 212 incisos 2.º y 3.º, y art. 213, se cometan por medio de la prensa diaria o periódica, se aplicará el máximo de la pena.

Quando los delitos previstos en los artículos 209, 212, incisos 2.º y 3.º, y art. 213, se cometan por impresos, o por cualquier otro artificio, para reproducir signos figurativos, la policía procederá al secuestro del instrumento del delito y el correo prohibirá su circulación.

Art. 51 bis. — Los reincidentes en los delitos previstos en los artículos 158, 209, 210, 211, 212, 213 y 225 bis, serán condenados a confinamiento en el punto que determine el poder ejecutivo, por un tiempo doble a la pena que correspondería a la primera condena.

Quando los reos de los delitos a que se refieren los artículos citados en el anterior, sean ciudadanos argentinos naturales o naturalizados, será un accesorio de la pena, la pérdida de los derechos políticos y el retiro de la ciudadanía argentina.

Art. 225 bis. — El que por los procedimientos indicados en el artículo 212, inciso 2.º, preconice el desconocimiento de la constitución nacional, o los que ofendan o insulten a la bandera, o al escudo de la nación, serán castigados con pena de tres a seis años de penitenciaría.

- d) No aceptar la supresión, en el artículo 13, de las palabras: "reclusión o"

Art. 13. — El condenado a reclusión o prisión perpetua, que hubiere cumplido veinte años de condena, y el condenado a reclusión

Art. 13. — Suprimir "reclusión o".

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

temporal o a prisión por más de tres años, que hubiere cumplido los dos tercios de su condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, obtendrán la libertad por resolución judicial, bajo las siguientes condiciones:

e) No aceptar la cláusula final agregada a los artículos 27, 41 y 49; desaprobando, en consecuencia, las siguientes adiciones:

1.º—Al art. 27: Si pendiente la condenación condicional se comprobare que lleva una vida manifestamente inmoral o antisocial, se le aplicará la pena que le hubiese sido impuesta por la condena.

2.º—Al art. 41: Cuando el reo esté acusado de haber cometido un delito castigado con prisión o reclusión mayor de diez años, no podrá pronunciarse la condena, antes de que su estado mental, sea examinado por un médico especialista.

3.º—Al art. 49: "Exceptuase de esta disposición, el caso del que venda, ponga en venta, imprima, distribuya, circule, exponga en lugares públicos o reparta los impresos o las reproducciones mecánicas de que hablan los ar-

Art. 27. — La condenación se tendrá como no pronunciada, si dentro del término para la prescripción de la pena, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas. Si pendiente la condenación condicional se comprobare que lleva una vida manifestamente inmoral o antisocial, se le aplicará la pena que le hubiese sido impuesta por la condena.

Art. 41. — A los efectos del artículo anterior, se tendrán en cuenta:

1.º La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y la extensión del daño y del peligro causados.

2.º La edad, la educación y las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiere incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

Art. 49. — "No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa, a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado, la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

tículos 209, 212, incisos 2 y 3, y el 213, que sufrirá la mitad de la pena prevista en dichos artículos, para el autor principal del hecho.

f) Aceptar en el artículo 158, el agregado de las palabras "o boycott", y no aceptar en el mismo la substitución de la palabra "violencia", por las palabras "coacción física o moral"

Art. 158. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que por sí, o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.

g) Aceptar las modificaciones introducidas al artículo 305, salvo las palabras "capítulo III", que quedan suprimidas.

Art. 305.—Quedan derogadas las leyes núms. 49, 1920, 4189, 7029, 9077 y 9143, lo mismo que las demás que se opusieren a la presente. Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales, no derogadas por la presente, quedan reemplazadas por la de reclusión, y las de prisión y arresto, por la de prisión.

h) Aceptar la supresión del artículo 4.º, numerando como artículo 3.º el último apartado del artículo 2.º, y como artículo 4.º, el artículo 3.º.

Art. 4.º — La represión de las faltas corresponde a las provincias, las que podrán imponer penas de prisión hasta un año, inhabilitación hasta tres años y multa hasta cuatro mil pesos moneda nacional.

Exceptuase de esta disposición, el caso del que venda, ponga en venta, imprima, distribuya, circule, exponga en lugares públicos o reparta los impresos y las reproducciones mecánicas de que hablan los artículos 209, 212, incisos 2 y 3, y el 213, que sufrirá la mitad de la pena prevista en dichos artículos, para el autor principal del hecho.

Art. 158. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el obrero que ejerciere coacción física o moral sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.

Art. 305. — Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 3355, 3900, 3972, 4189, 7029 (capítulo III), 9077 y 9143, lo mismo que las demás, en cuanto se opusieren a este código. Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por este código, quedan reemplazadas por la de reclusión y las de prisión y arresto, por la de prisión.

Art. 2.º — Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena, se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.

Art. 3.º — En el cómputo de la prisión preventiva, se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 4.º (antes 3.º). Las disposiciones generales del presente código, se aplicarán en todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario.

1) Aceptar la supresión del artículo 77, numerando como artículo 77, el artículo 78, y como artículo 78, la siguiente cláusula: "Queda comprendido en el concepto de "violencia", el uso de medios hipnóticos o narcóticos".

Art. 77. — Por delitos contra la libertad política, además de la acción penal, procederá la acción particular de cualquier ciudadano.

Iniciada la acción por un ciudadano, el representante del ministerio fiscal deberá intervenir en el proceso, desde el principio hasta la terminación, y no podrá desistir de la querrela, aunque desistiera el acusador particular.

Art. 77. — (antes 78). Para la inteligencia del texto de este código, se tendrán presente las siguientes reglas:

Los plazos señalados en este código, se contarán con arreglo a las disposiciones del código civil.

La expresión "reglamentos" u "ordenanzas" comprende todas las disposiciones de carácter general, dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente, del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Con la palabra "mercadería", se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término "capitán", comprende a todo comandante de embarcación o al que le substituye.

El término "tripulación", comprende a todos los que se hallan a bordo, como oficiales o marineros.

2) Aceptar la supresión del artículo 268, numerando como 267, el segundo apartado del artículo 266, y como artículo 268, el artículo 267.

Art. 268. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exijiere por sí o por persona interpuesta, derechos o propinas por lo que deba practicar gratuitamente, en virtud de su oficio, o cobrar mayores derechos que los que le correspondan.

Si para efectuar la exacción supusiere orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, sufrirá, además, inhabilitación especial por uno a seis años.

Art. 266. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que abusando de su cargo exijiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que le corresponden.

Art. 267. — Si se empleare intimidación o se invocase orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autoridad legítima, podrá elevarse la prisión hasta un año y la inhabilitación hasta cuatro.

Art. 268. — Será reprimido con prisión de dos a seis años o inhabilitación absoluta per-

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

petua, el funcionario público que convierta en provecho propio o de tercero, las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

k) No aceptar que el artículo 70, sea agregado después del artículo 33, y en consecuencia, mantener su actual colocación.

Art. 33. — La reparación se hará efectiva por la vía de apremio. En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:

1.ª Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 11.

2.ª Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

Art. 70. — Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aun después de muerto.

l) Aceptar las modificaciones introducidas al artículo 52, sin que su última parte constituya un artículo separado y, en consecuencia, mantener su actual colocación.

Art. 52. — La relegación será impuesta por tiempo indeterminado y como accesoria de la última condena, cuando mediare:

1. Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años;
2. Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión y dos de prisión de tres años o menos;
3. Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años;
4. Cinco condenas a prisión de tres años o menores.

Se le aplicará también como accesoria de la condena, en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos, y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

m) Aceptar la adición hecha al artículo 105, sin que éste pase a formar parte del artículo 104, y, en consecuencia, mantener su numeración.

Art. 104. — Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona, sin hierirla.

Art. 52. — La reclusión en un paraje de los territorios del sud, será impuesta por tiempo indeterminado, y como accesoria de la última condena cuando mediaren las siguientes circunstancias:

1. Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años;
2. Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión y dos de prisión de tres años o menos;
3. Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años;
4. Cinco condenas a prisión de tres años o menores.

Se le aplicará la relegación también como accesoria de la condena, en los casos de concurso de delitos siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos, y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

Art. 105. — Dejarlo como parte final del art. 104, redactado como sigue: "Será reprimida con prisión de quince días a seis meses,

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Art. 105. — Será reprimida con prisión de quince días a seis meses la agresión con toda arma, aunque no se causare herida.

n) Aceptar las demás modificaciones introducidas al proyecto de código penal, por el honorable senado.

Artículo 1.º — Este código se aplicará:

- 1.º Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, en sus buques de guerra, en los mercantes que lleven su bandera, cuando naveguen en alta mar o se encuentren en aguas jurisdiccionales de un estado que no los reprimiese, o en los buques mercantes de bandera extranjera, que se hallen en sus aguas jurisdiccionales:
- 2.º Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas, en desempeño de su cargo.
- 3.º Por delitos de piratería, cuando los responsables cayeren bajo el poder de la nación.
- 4.º Por delitos cometidos en el extranjero por argentinos nativos, cuando fueren aprehendidos por las autoridades nacionales y la extradición fuese denegada o no fuese requerida dentro de los tres meses de la detención.

Art. 3.º — Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales.

Art. 7.º — Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieren reclusión, sufrirán la condena en prisión.

Art. 11. — El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará:

- 1.º A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos.
- 2.º A la prestación de alimentos según el código civil.
- 3.º A costear los gastos que causare en el establecimiento.
- 4.º A formarle un fondo propio que se le entregará a su salida.

Art. 12. — La reclusión y la prisión por más de tres años importan la inhabilitación absolu-

la agresión con toda arma, aunque no se causare herida. Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, inciso 1.º, letra a), la pena se aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente".

Art. 1.º — Este código se aplicará:

- 1.º Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
- 2.º Igual.
- 3.º Suprimido.
- 4.º Suprimido.

Art. 3.º — Agregarle: "en cuanto estas no dispusieran lo contrario".

Art. 7.º — Agregarle: "no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la dirección del establecimiento".

Art. 11. — Agregar después de la palabra "aplicará": "simultáneamente".

Art. 12. — La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la-

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

ta por el tiempo de la condena y de uno a tres años más, según el caso y a juicio del tribunal. Importa también la privación de los derechos civiles con excepción del de testar, reconocer hijos naturales y contraer matrimonio "in extremis". El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el código civil para los incapaces.

La privación de la patria potestad corresponderá a todos los casos cuando el delito se haya cometido sobre los hijos del condenado o en perjuicio de los mismos.

Art. 13. — El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, y el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, obtendrán la libertad por resolución judicial bajo las siguientes condiciones:

- 1.º Residir en el lugar que determine el auto de soltura.
- 2.º Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto.
- 3.º Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
- 4.º No cometer nuevos delitos.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento del término de la pena.

Art. 16. — Transcurrido el término de la condena, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

Art. 18. — Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias deberán mandarlos siempre que no tuvieran establecimientos adecuados.

Art. 19. — La inhabilitación absoluta importa:

- 1.º La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de elección popular;
- 2.º La privación del derecho electoral;
- 3.º La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos;

inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el código civil para los incapaces.

Art. 13. — El condenado a prisión perpetua que hubiese cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años, que hubiese cumplido los dos tercios de su condena, y el condenado a reclusión o prisión, por menos de tres años, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad, por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento, bajo las siguientes condiciones...". El resto del artículo no se modifica.

Art. 16. — Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12.

Art. 18. — Al final del artículo, substituir la palabra "deberán" por "podrán".

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

4.° La pérdida de toda jubilación, pensión, o goce de montepío de que disfrutase. Si el penado tuviese esposa, hijos menores de cualquier clase o padre anciano y desvalido, corresponderá a éstos el importe de la jubilación, pensión o goce de montepío.

Art. 21. — La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, dentro del *máximum y mínimum establecidos para el delito*, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. En todos los casos, cuando la multa no se hubiere satisfecho seis meses después de la condena, corresponde la prisión del condenado.

Art. 23. — Toda condena penal llevará consigo la pérdida de los efectos que provengan del delito y de los instrumentos con que se ejecutó. Los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse, pudiendo aprovechar sus materiales los gobiernos de provincia, o el arsenal de guerra de la nación.

Art. 24. — La prisión preventiva que hubiere sufrido el condenado se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación; o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre cuatro y diez pesos.

Art. 26. — En los casos de primera condena por delito al que corresponda pena de reclusión o prisión que no exceda de tres años, o de multa, los tribunales podrán ordenar, en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en la personalidad moral del condenado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 19. — Agregar al final del inciso 4.°: *"En caso contrario, su importe se destinará a aumentar los fondos provenientes de la aplicación del artículo 11"*.

Art. 21. — La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.

Si el reo no pagase la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado.

Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello.

También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado.

Art. 23. — La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito, los que, con los efectos provenientes del mismo, serán decomisados, a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse. Pueden aprovechar sus materiales los gobiernos de provincia, o el arsenal de guerra de la nación.

Art. 24. — Suprimir las palabras: *"que hubiese sufrido el condenado"*.

Art. 26. — En el primer apartado substituir "3 años", por "2 años". Y agregar al final del segundo apartado: *"fuese de", entre "o" y "multa"*.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

servir para apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá las informaciones que crea pertinentes para formar criterio.

En los casos de concurso de delitos procederá la condenación condicional, si la pena aplicable al reo no excediese de dos años de prisión, o multa.

Art. 27. — La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término para la prescripción de la pena *a contarse desde la fecha de la sentencia*, el condenado no cometiere un nuevo delito.

Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas.

Art. 28. — La suspensión de la pena no comprenderá:

1.° La reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.

2.° Las incapacidades anexas a la condenación impuestas accesoriamente.

Sin embargo, estas incapacidades cesarán el mismo día en que por haber transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se tuviere la condenación como no pronunciada, o en el plazo que la sentencia les hubiese fijado si fuere menor que aquél.

Art. 29. — La sentencia condenatoria ordenará:

1.° La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. *Las leyes de procedimientos reglamentarán esta acción.*

2.° La restitución a su dueño de la cosa obtenida por el delito. Si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente de la cosa, más el de estimación si lo tuviere.

3.° El pago de costas.

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 27. — Suprimir en el primer apartado: *"a contarse desde la fecha de la sentencia"*.

Art. 28. — La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.

(El resto se suprime).

Art. 29. — La sentencia condenatoria podrá ordenar:

En el inciso 1.° suprimir el último párrafo: *"Las leyes de procedimientos reglamentarán esta acción"*.

En el inciso 2.° suprimir: *"a su dueño"* e intercalar "y", entre "delito" y "si no".

Agregar como inciso 4.°: *"Cuando la reparación civil no se hubiese cumplido durante la condena, o cuando se hubiere establecido a favor del ofendido o de su familia una pena de indemnización, el juez en caso de insolvencia, señalará la parte de los salarios del responsable, que debe ser aplicada a esas obligaciones, antes de proceder a concederle la libertad condicional"*.

Art. 31. — Suprimir el segundo apartado:

Art. 31. — La obligación de reparar el da-

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

No es solidaria entre todos los responsables del delito.

El que pagare todo el daño no podrá demandar a los otros cuota alguna.

Art. 33. — La reparación se hará efectiva por la vía de apremio. En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:

- 1.º Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 11.
- 2.º Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

Art. 34. — No son punibles:

- 1.º El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, comprender la naturaleza y el sentido de lo que hacía o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación el tribunal ordenará la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos, que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

En todos los demás casos en que se absolviera a un procesado por las causas del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado, hasta que se comprobare la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso.

Art. 41. — A los efectos del artículo anterior, se tendrán en cuenta:

- 1.º La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y la extensión del daño y del peligro causados.
- 2.º La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiere incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales que demuestren su mayor o me-

“El que pagare todo el daño, no podrá demandar a los otros cuota alguna”.

Art. 33. — Suprimir la primera parte del artículo: “La reparación se hará efectiva por la vía de apremio”. Lo demás no se modifica.

Art. 34. — En el inciso 1.º, a continuación de “inconciencia” agregar “error o ignorancia de hecho no imputable”. Substituir las palabras “naturaleza y el sentido de lo que hacía” por “criminalidad del acto”.

En el segundo apartado del mismo inciso substituir “ordenará” por “podrá ordenar”.

En el tercer apartado suprimir la palabra “todos”.

Art. 41. — A los efectos del art. anterior, se tendrá en cuenta:

- 1.º La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados.
- 2.º La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

nor perversidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

Art. 42. — El que comienza la ejecución de un delito premeditado de antemano, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.

Art. 44. — La pena que correspondería al agente si hubiere consumado el delito se disminuirá de un tercio a la mitad.

Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de la tentativa será prisión de diez a quince años.

Art. 45. — Los que toman parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.

Art. 46. — Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán castigados con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años, y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años.

Art. 47. — Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor principal, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.

Art. 48. — Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir

hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

Art. 42. — El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.

Art. 44. — Agregar como segundo apartado: “Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad, y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente”. El resto no se modifica.

Art. 45. — Al final del artículo suprimir la palabra “directamente”.

Art. 46. — Substituir la palabra “castigados” por “reprimidos”.

Art. 47. — Después de “autor” suprimir la palabra “principal”.

Art. 48. — Después de “autor” suprimir la palabra “instigador”.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor, *instigador* o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partípepe.

Art. 49. — No se considerarán partípepes de los delitos cometidos por la prensa a los *editores, impresores y demás* personas que prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

Art. 50. — Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación.

Art. 51. — Los reincidentes por segunda vez, condenados a pena restrictiva de la libertad que excediera de dos años, cumplirán su condena con relegación en un paraje de los territorios del sud.

Art. 52. — La *relegación* será impuesta por tiempo indeterminado y como accesoria de la última condena, cuando mediaren:

- 1.° Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años.
- 2.° Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión y dos de prisión de tres años o menos.
- 3.° Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años.
- 4.° Cinco condenas a prisión de tres años o menores.

Se aplicará también como accesoria de la condena en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos y que dos de ellos

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 49. — No se considerarán partípepes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que *solamente* prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

Art. 50. — Habrá reincidencia, siempre que el condenado por sentencia firme a una *pena privativa de libertad*, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiese mediado indulto o conmutación.

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición.

A los efectos de la reincidencia no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados.

Art. 51. — El reincidente por segunda vez condenado a pena privativa de la libertad que excediera de dos años, cumplirá su condena con reclusión en un paraje de los territorios del sud.

La pena de privación de libertad que el procesado sufrió antes de haber cumplido veintiún años, no podrá computársele para la agravación de la pena.

Art. 52. — La *reclusión en un paraje de los territorios del sud*, será impuesta por tiempo indeterminado, y como accesoria de la última condena, cuando mediaren las siguientes circunstancias:

(Los cuatro incisos, sin modificación).

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

Art. 73. — Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:

- 1.° Adulterio;
- 2.° Calumnias, injurias, difamación y ultraje;
- 3.° Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154;
- 4.° Extorsión en el caso del artículo 170;
- 5.° Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159.

Art. 74. — La acción por delito de adulterio corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio, por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal.

Art. 75. — La acción por calumnia, injuria, difamación o ultraje, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

Art. 78. — Para la inteligencia del texto de este código, se tendrán presentes las siguientes reglas:

Los plazos señalados en este código se contarán con arreglo a las disposiciones del código civil.

La expresión "reglamentos" u "ordenanzas", comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Se entiende por "banda", la asociación de dos o más individuos para cometer delitos indeterminados.

Con la palabra "mercadería", se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término "capitán", comprende a todo comandante de embarcación o al que le substituye.

El término "tripulación", comprende a to-

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 73. — Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:

- 1.° Adulterio;
- 2.° Calumnias e injurias;
- 3.° Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154.
- 4.° Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159.

Art. 74. — Agregar al final: "El cónyuge que ha consentido el adulterio o lo ha perdonado, no tiene el derecho de iniciar la acción.

La muerte del cónyuge ofendido extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la pena".

Art. 75. — La acción por calumnia o injuria podrá ser ejercitada sólo por el ofendido, y después de su muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

Art. 78. — Suprimir el párrafo: "Se entiende por "banda" la asociación de dos o más individuos para cometer delitos indeterminados".

Agregar al final del artículo: "Quedan comprendidos en el concepto de "violencia" el uso de medios hipnóticos, narcóticos u otros semejantes".

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

dos los que se hallan a bordo como oficiales o marineros.

Art. 81. — Se impondrá reclusión o prisión por tres a seis años:

- 1.° Al que matare a otro, si la víctima misma provocó el acto homicida con ofensas o injurias ilícitas y graves;
- 2.° A la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o hasta tres días después, y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieran el mismo delito;
- 3.° Al cónyuge, al ascendiente o al hermano, que matare a su cónyuge, descendiente o hermana, o al cómplice, o a ambos, en el acto de sorprenderles en ilegítimo concubito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las circunstancias particulares del hecho;
- 4.° Al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.

Art. 83. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio *tuviere lugar*.

Art. 86. — Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto, o cooperaren a causarlo.

Art. 93. — Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1.° del artículo 81, la

Art. 81. — 1.°: *Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:*

- a) *Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hacían excusable;*
 - b) *Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjera la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.*
- 2.° *Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento, o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal, y a los padres, hermanos, marido e hijos, que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a) del inciso 1.° de este artículo.*

Art. 83. — Agregarle al final: “Se hubiese tentado o consumado”, suprimiendo las palabras “*tuviere lugar*”.

Art. 86. — Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior, y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto, o cooperaren a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible:

- 1.° *Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.*
- 2.° *Si el embarazo proviene de una violación, o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Lo demás del artículo, no se modifica.*

Art. 93. — Agregar después de “inciso 1.°” “*letra a*”.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

pcna será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.

Art. 106. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que abandonare o *dejare en desamparo* a un menor de diez años u otra persona incapaz por causa de enfermedad, a quien deba mantener o cuidar.

La pena será de reclusión o prisión de dos a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz.

La reclusión o prisión será de tres a diez años, si ocurriere la muerte.

Art. 110. — El que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con multa de cien a un mil pesos moneda nacional.

Art. 115. — Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

Art. 118. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año:

- 1.° La mujer que cometiere adulterio.
- 2.° El codeficiente de la mujer.
- 3.° El marido, cuando *tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal*.
- 4.° La manceba del marido, *dentro de la casa conyugal*.

Art. 126. — Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción *aunque hubiere consentimiento de la víctima*.

Capítulo V. — Disposiciones comunes a los “*artículos*” anteriores.

Art. 132. — En los casos de violación, estupro o rapto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

Art. 106. — Suprimir al principio del artículo las palabras “*o dejare en desamparo*”.

Art. 110. — Agregar al final del artículo “*o prisión de un mes a un año*”.

Art. 115. — Redactado como sigue: “Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales *y no dados a publicidad*, quedarán sujetos únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes”.

Art. 118. — En el inciso 4.° donde dice: “La manceba del marido” suprimir “*dentro de la casa conyugal*”.

Art. 126. — Suprimir al final del artículo las palabras “*aunque hubiere consentimiento de la víctima*”.

Capítulo V. — Donde dice: “Disposiciones comunes a los artículos anteriores”, debe decir: “Disposiciones comunes a los *capítulos* anteriores”.

Art. 132. — Al principio del artículo, después de “*rapto*”, agregar “*o abuso deshonesto*”.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

Art. 149. — Será reprimido con prisión de un mes a un año el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere substraído a la potestad o guarda que estaba legalmente sometido.

La pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviere diez años cumplidos.

Art. 163. — Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:

- 1.° Cuando el hurto fuere de animales en rebaño, o de productos separados del suelo y dejados por necesidad en el campo.
- 2.° Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública, o de un infortunio particular del damnificado.
- 3.° Cuando se hiciera uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la substraición, o de la llave verdadera que hubiere sido substraída o hallada.
- 4.° Cuando se perpetrare con escalamiento.

Art. 164. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitararlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

Art. 166. — Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años:

- 1.° Si por las violencias ejercidas para consumir el robo, se pusiere en peligro de muerte a una persona, o se alterare permanentemente su salud.
- 2.° Si el robo se cometiere en despoblado y en banda.

Art. 167. — 3.° — Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, puerta o ventana de un lugar habitado, o sus dependencias inmediatas.

Art. 168. — Será reprimido con prisión de

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 149. — Al final del artículo, suprimir la palabra "cumplidos".

Art. 163. — Modificar el inciso 1.° redactándolo en la siguiente forma: "Cuando el hurto fuese de ganado mayor o menor, o de productos separados del suelo, o máquinas o instrumentos de trabajo, dejados en el campo; o de alambres u otros elementos de los cercos, causando su destrucción total o parcial". Lo demás no se modifica.

Art. 164. — Donde dice: "de uno a seis años" debe decir "de un mes a seis años".

Art. 166. — Redactado el inciso 1.° como sigue: "Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91".

En el inciso 3.° del mismo agregar después de "cerco", "techo o piso". (1)

El resto no se modifica.

Art. 168. — Redactado como sigue: "Será

(1) Esta modificación se refiere al inciso 3.° del artículo 167.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

uno a cuatro años, el que con violencia o intimidación o simulando orden de autoridad pública, obligue a otro a enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Art. 169. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, obligare a otro maliciosamente a la entrega de un valor o de una cosa cualquiera que no sea del culpable, o a contraer una obligación o a extinguir un crédito.

Art. 186. — El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:

- 1.° Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes;
- 2.° Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería;
- 3.° Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona;
- 4.° Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Art. 209. — El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes a cuatro años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.

SANCION DEL HONORABLE SENADO

reprimido con prisión de uno a cuatro años el que con intimidación, o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que, por los mismos medios o con violencia, obligue a otros a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito".

Art. 169. — Suprimir desde "obligare a otro" al final y redactado como sigue: "Será reprimido con prisión de seis meses a 4 años el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente".

Art. 186. — Substituir el inciso 2.° por el siguiente: "Con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio".

- a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados;
- b) De bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
- c) De ganado en los campos, o de sus productos amontonados en el campo o depositados;
- d) De la leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio;
- e) De alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sean en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfarados;
- f) De los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento.

Los incisos 2.°, 3.° y 4.°, pasan sin modificación a ser incisos 3.°, 4.° y 5.°, respectivamente.

Art. 209. — Redactarlo como sigue: "El que públicamente instigare a cometer un delito, será reprimido por la sola instigación con prisión de un mes a cuatro años. Si la instigación produjera efecto, será penado como autor del hecho cometido."

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

Art. 211. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que para infundir un temor público, o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, o amenazare con un desastre de peligro común.

Art. 212. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años.

1.º El que fabrique, venda, transporte o conserve explosivos susceptibles de causar estragos, sin permiso de la autoridad.

2.º El que propague por cualquier medio los procedimientos para causar incendio o estragos y para fabricar los materiales destinados a producirlos.

3.º El que propague los medios de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos.

Art. 214. — Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos, o les prestare cualquier ayuda o socorro.

Art. 226. — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, los que se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, cambiar la constitución, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Art. 229. — Serán reprimidos con prisión de uno a tres años los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales, o su formación o renovación en los términos y formas establecidos en la ley.

Art. 237. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 211. — Será reprimido con prisión de un mes o dos años, el que para infundir un temor público, o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, las colocar con ese fin o amenazare con un desastre de peligro común.

Art. 212. — En el inciso 1.º, después de “explosivos” agregar: “o instrumentos o materias destinadas a su fabricación”.

Art. 214. — Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua, y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino, o toda persona que deba obediencia a la nación, por razón de su empleo o función pública, que tomase las armas contra ésta, se uniera a sus enemigos, o les prestare cualquier ayuda o socorro.

Art. 226. — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, los que se alzaren en armas para cambiar la constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Art. 229. — Agregar después de “alzaren en armas para” las palabras “cambiar la Constitución local”.

Art. 237. — Redactado como sigue: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

SANCION DEL HONORABLE SENADO

eión o fuerza contra un funcionario público, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Art. 241. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:

1.º El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones.

2.º El que sin estar comprendido en el artículo 257, impidiera o estorbare a un funcionario público, cumplir un acto propio de sus funciones.

Art. 243. — Será reprimido con prisión de quince días a un mes el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.

En el caso del perito o intérprete se impondrá, además, al reo, inhabilitación de un mes a un año.

Art. 244. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que provocare a duelo, amenazare, injuriare o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o decoro a un funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones y al tiempo de practicarlas.

La prisión será de un mes a un año, si el ofendido fuere el presidente de la nación, un miembro del congreso, un gobernador de provincia, un ministro nacional o provincial, un miembro de las legislaturas provinciales o un juez.

Art. 248. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Art. 249. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público, o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”.

Art. 241.—Inciso 2.º: En vez de art. “257” es “237”.

Art. 243. — En el final del artículo después de “inhabilitación” agregar “especial”.

Art. 244. — Al final del primer apartado substituir “y” por “o”.

Art. 248. — Agregar después de “inhabilitación”, “especial”.

Art. 249. — Agregar después de “inhabilitación”, “especial”.

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

Art. 257. — Será reprimido con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, el juez que aceptare promesa o dádiva para dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia.

Art. 258. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere dádivas a un funcionario público para que haga u omita un acto relativo a sus funciones. Si la dádiva se hiciere u ofreciere a un juez, la pena será de un mes a cuatro años de prisión.

Si el culpable fuere funcionario público sufrirá además inhabilitación, en el primer caso, por seis meses a seis años, y en el segundo, por unos diez años.

Art. 266. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exigiere una contribución ilegal, o abusando de su cargo, reclamare o recibiere dinero u otros valores.

La inhabilitación será de uno a cuatro años si la exacción se verificare empleando fuerza.

Art. 285. — Para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados a la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacionales, provinciales o municipales, los títulos, cédulas y acciones al portador, emitidos legalmente por los bancos o compañías autorizadas para ello.

Art. 303. — El presente código regirá como ley de la nación desde el 1.º de enero de 1918.

fi) Declarar que en la comunicación del proyecto sancionado, dirigida al honorable senado, se incurrió en error de copia, al substituirse, en el artículo 174, inciso 5.º, la palabra "perjuicio", por la palabra "ejercicio"

El inciso queda como sigue: artículo 174, inciso 5.º: El que cometiere fraude en "perjuicio" de alguna administración pública"

Sala de la comisión, septiembre 9 de 1921.

Roberto Parry. — L. Landaburu. — C. M. Pradère. —
Antonio de Tomaso. — D. del Valle.

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Art. 257. — Agregar después de "dictar" "o demorar u omitir dictar".

Art. 258. — En el segundo apartado, después de "inhabilitación" agregar "especial". Donde dice "unos diez años" debe decir "uno a diez años".

Art. 266. — Modificado, queda como sigue: "Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que abusando de su cargo exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que le corresponden. Si se empleare intimidación o se invocase orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta un año y la inhabilitación hasta cuatro."

Art. 285. — Agregar al final del artículo: "y los cheques".

Art. 303. — El presente código regirá como ley de la nación, seis meses después de su promulgación.

Comunicación del honorable senado

Buenos Aires, septiembre 1.º de 1921

Señor presidente de la honorable cámara de diputados:

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el honorable senado, en sesión de la fecha, ha tenido a bien sancionar el proyecto de ley de código penal, en revisión, con las modificaciones del pliego adjunto.

Dios guarde al señor presidente.

BENITO VILLANUEVA

Adolfo J. Labougle.

INFORME

I

Modificaciones aceptadas

Honorable cámara:

En el estudio en particular de la reforma penal, el honorable senado se ha limitado a introducir en el proyecto en revisión las modificaciones que consideró indispensables, "aceptando las bases y los puntos fundamentales de la reforma sancionada por la honorable cámara de diputados", sin tocar la estructura del proyecto, ni alterar su sistema con otras modificaciones, según lo expresaba su comisión de códigos, en su informe de 26 de septiembre de 1919.

En esa sanción, el honorable senado modifica algunas normas relativas a la aplicación de la ley penal; elimina la restricción que se establecía al derecho de las provincias para legislar sobre faltas; establece el cuidado de un patronato para los liberados condicionalmente; admite el pago por cuotas de las penas pecuniarias; hace extensivos los efectos de la condena condicional a las incapacidades anexas; permite que el juez se pronuncie, al fallar, sobre las indemnizaciones, sin imponerle la obligación de hacerlo en todos los casos; tiene en cuenta, a los efectos de la reincidencia, las sentencias dictadas en el extranjero; no exige, al definir la tentativa, que el delito sea premeditado; corrige el error de considerar a la extorsión como delito privado; priva de acción al que consintió o perdonó el adulterio

rio y declara extinguida la acción a la muerte del ofendido; se refiere, en el homicidio, en vez de las injurias ilícitas y graves, a la emoción violenta excusable; suprime el derecho de matar que la legislación vigente pareciera reconocer; legisla sobre infanticidio ejecutado bajo la influencia del estado puerperal; declara en qué casos no es punible el aborto practicado por médico diplomado; impone prisión o multa al autor de injurias; castiga a la manceba del marido, aunque no viva en la casa conyugal; restablece, en el delito de hurto, la expresión: "ganado mayor o menor"; agrava la penalidad en determinados casos de incendio; reprime al que colocare bombas con el fin de hacerlas estallar; requiere, en el delito de traición, que la obediencia debida a la nación sea por razón de empleo o función públicas y enmienda las disposiciones relativas a exacciones ilegales, modificando, además, muchos artículos del proyecto a fin de darles una redacción más adecuada o más correcta.

Vuestra comisión os aconseja la aceptación de todas estas modificaciones, refiriéndose para fundarlas al despacho de la comisión de códigos del honorable senado, y limitándose a exponer con mayor detenimiento las razones determinantes de las disidencias de criterio frente a la sanción del honorable senado, en lo que se refiere a otros artículos del proyecto de código penal.

II

Pena de muerte

Vuestra comisión aconseja la insistencia en su anterior sanción, eliminatoria de la pena capital. Es una cuestión que debe decidirse por simple votación sin previo debate. La inclusión de esta pena fué sancionada por el honorable senado sin escuchar argumentaciones, que habrían resultado inconducentes dando lo árduo del tema.

La ley número 4189 prodigaba la pena de muerte en el título del homicidio, a pesar de lo cual muy pocas ejecuciones han tenido lugar, según lo hacía notar, en su informe de 1917, la comisión especial de legislación penal y carcelaria, agregando: "Los jueces, como si se hubieran puesto de acuerdo, han evitado la aplicación de la pena capital, y en los con-

tados casos en que se ha pronunciado, los poderes ejecutivos de la nación o de las provincias han concurrido con la salvadora conmutación; lo que demuestra una vez más, que no basta sancionar una ley para resolver un problema, requiriéndose como elemento esencial que ella se adapte a las necesidades y al pensamiento dominante en el medio al cual ha de aplicarse".

No entra en nuestros propósitos abordar la cuestión. Nos limitamos a reproducir las siguientes consideraciones del informe de la comisión de códigos del honorable senador:

"En nuestra república la pena capital es una taba abolida de hecho hace mucho tiempo. Si bien los tribunales solían aplicar algunas veces, el presidente de la nación o los gobernadores de provincia conmutaban la pena, haciendo uso de la facultad constitucional y respondiendo a nobles sentimientos de piedad y clemencia. La ley positiva no debe, por lo tanto, consignar una pena en pugna con la conciencia colectiva y rechazada por las costumbres y los sentimientos del pueblo argentino.

"La comisión juzga inútil entrar a fundar extensamente la necesidad y la justicia de la abolición de la pena de muerte. El debate sobre esta cuestión está agotado y la bibliografía es abundante. Pero debe afirmar que la pena capital no responde a la necesidad de la defensa de la sociedad amenazada por el crimen y que, en verdad no llena ninguno de los fines atribuidos a la represión de los delitos por las distintas escuelas. No es ejemplar, porque no intimida a los criminales perversos, pudiendo decirse de ella lo que afirma el doctor González Roura: la pena de muerte no puede servir sino "para espantajo de supuestos timoratos". No es útil porque segrega a la sociedad a ciudadanos que, por malvados que sean, pueden ser utilizados en el trabajo; es innecesaria, por cuanto la sociedad dispone de medios adecuados para evitar que los delincuentes más feroces puedan amenazar de nuevo; es ineficaz, pues la estadística demuestra que en los países donde ha sido suprimida, no ha aumentado la criminalidad: es injusta porque traspasa los límites de la defensa social; y es, por último, irreparable en los casos, no tan raros por desgracia, de un error judicial".

III

Fijación del monto de las penas

El ex senador Rojas sostuvo, en su informe de 1918, la conveniencia de hacer figurar en el libro primero del código, como una noción orgánica de la pena, la determinación del máximo y del minimum; argumentando que sin esta enunciación en la parte general del código, habría que "leer cuidadosamente todo el libro segundo para saber, al fin, cuál es el máximo y el minimum de cada pena".

Si estas son las razones determinantes de los agregados propuestos a los artículos 6.º y 9, preferimos aconsejar a vuestra honorabilidad el mantenimiento de su anterior sanción, considerando que "la ley penal argentina, al enumerar las penas, no debe tener en cuenta más que la calidad, reservando el tratar la cantidad para cuando deben distribuirse entre los diversos delitos".

Por otra parte, el mismo ex senador Rojas decía: "Hacer descender el límite de la represión de los delitos abajo de treinta días, es fijar una pena que debe reservarse para las faltas. Por eso establecemos que el minimum de la prisión es de un mes". En cambio, el agregado proyectado al artículo 9, fija ese minimum en cuatro días.

Por estas razones, proponemos la desaprobación de las adiciones proyectadas a los artículos 6. y 9.

IV

Artículo 10

Por el agregado al artículo 10, se permitiría que las personas de muy honestos antecedentes cumplieran en su propia casa la prisión que no excediera de seis meses, disposición que fácilmente se prestaría a abusos y favoritismos. Si el procesado por un delito leve, cuya pena no exceda de seis meses de prisión, es realmente de "muy honestos antecedentes", no precisará del beneficio, desde que estará amparado por la condena condicional. Estas razones nos determinan a aconsejar el rechazo del agregado.

V

Libertad condicional

La eliminación, en el artículo 13, de las palabras: "reclusión o", conduciría a negar al

condenado a reclusión perpetua la posibilidad de obtener su libertad. Pocas legislaciones niegan la libertad condicional a los condenados a perpetuidad (Estados Unidos, Wisconsin), y las que la conceden señalan un plazo mínimo de encarcélamiento que va de cinco años (Congo) a diez (Bélgica y Japón), doce (Finlandia), quince (Luisiana y actual código argentino), y veinte (Hungría y Egipto). El artículo 13 del proyecto en revisión exige, para la concesión del beneficio, el cumplimiento de veinte años de condena, lo que no constituye, por cierto, exceso de benignidad. No es conveniente suprimir el beneficio, sobre todo si se considera que la libertad es revocable y que el liberado puede ser sometido, durante cinco años, al cuidado de un patronato. La libertad condicional es un estímulo de buena conducta, en germen de enmienda, una prima ofrecida al detenido arrepentido, y no conviene eliminar este poderoso resorte que influye eficazmente en la conducta del condenado, durante el cumplimiento de la pena.

VI

Artículos 36 y 37

Según la enmienda del honorable senador, los jueces procederían con arreglo a lo que prescribe la ley número 10.903. Nos parece inconveniente la incorporación al código de las normas consagradas por esta ley especial, máxime cuando ella solo rige en la capital federal y territorios, según expresamente lo prescribe en sus artículos 15 y 16. Corresponde, pues, insistir en la sanción dada a estos artículos, destinados a regir en todo el territorio de la república, lo que no impedirá a los tribunales de la capital y territorios dar cumplimiento a los preceptos de esa ley especial número 10.903, sobre patronatos de menores, que no está expresamente derogada. (Ver artículos 3 y 305 del proyecto de código).

VII

Artículo 45

Al imponer la pena del autor al que determinar a otro a la comisión del delito, se agregó la palabra "directamente" para significar cual debe ser el carácter de la acción ejercida por el instigador sobre el autor mate-

rial. Aconsejamos el mantenimiento de esa palabra, erróneamente suprimida en la sanción del honorable senador.

VIII

Artículo 114

La modificación que el honorable senador introduce a este artículo se funda en las opiniones vertidas por el señor procurador de la suprema corte. En cambio, la sanción de la honorable cámara de diputados está de acuerdo con la jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación, relativa a los delitos de imprenta, jurisprudencia que, por ser bien conocida, no es necesario examinar detenidamente. Basta lo expuesto para fundar nuestra opinión en el sentido de la insistencia en la sanción anterior.

IX

Artículo 209

La comisión especial de legislación penal y carcelaria de esta honorable cámara decía, en su informe: "La instigación, para ser castigada, debe hacerse en forma determinada contra una persona o una institución. Sería sumamente peligroso castigar a quien instigare en forma indeterminada, pues ello podría prestarse a numerosos abusos contra la libertad individual y contra la libertad de propaganda. Debe además, tenerse en cuenta que esas instigaciones no dependen, principalmente, de la persona que habla o ejercita el derecho de difundir sus ideas, sino, de las personas que la oyen, las cuales, por razones diversas o por encontrarse preparadas para el delito, pueden incurrir en las infracciones, aun cuando la propaganda no haya debido llevarlas a cometerlas".

Estas razones subsisten y es a mérito de ellas que aconsejamos el rechazo de la modificación sancionada por el honorable senador.

X

Ley número 7.029

El informe redactado por el ex senador doctor Angel Rojas, en 1918, relativo al proyecto de despacho de las comisiones de código

gos y justicia militar del honorable senado, contenía esta apreciación: "Corresponde que el código sea un texto claro, firme, previsor, de espíritu ilustrado y progresivo, sin que quede sujeto a la expectativa próxima de nuevas leyes de reforma".

La inclusión en este proyecto de código, de varios artículos de la ley 7029, ley cuya derogación ha sido tantas veces requerida, constituiría un verdadero peligro. "Un código es de aquellos organismos legales que, por su propia índole, no pueden estar sometidos a modificaciones frecuentes"; de modo que la incorporación de disposiciones de discutible justicia engendraría el desprestigio de la obra legislativa. Las disposiciones de la ley 7029 han quedado "absorbidas y armonizadas en el proyecto de código", según lo reconoció expresamente, en su informe, la comisión de códigos del honorable senado.

La ley 7029, sancionada en circunstancias especiales, trastornó los principios fundamentales consagrados en nuestra legislación penal; implantó normas jurisdiccionales violatorias de la constitución; creó reglas procesales impracticables y finalmente, desvirtuó el sistema vigente sobre participación criminal, introduciendo una verdadera confusión en el criterio jurídico de esta época.

No es necesario repetir los razonamientos ya conocidos demostrativos de la necesidad de derogar la ley 7029. Esta honorable cámara, al sancionar el proyecto de código penal, hizo ya el pronunciamiento correspondiente. No es admisible, pues la pretensión de dejar en vigencia los capítulos 1 y 2 de esa ley llamada de seguridad social; porque el capítulo 1 reglamenta la entrada y expulsión de los extranjeros, materia que debe ser legislada especialmente, como se proyectó en esta cámara por el ex diputado doctor Carlos Melo y sobre la cual rige aun la ley 4144 de innegable severidad; y porque el capítulo 2.º restringe la libertad de reunión en forma hiriente para la opinión pública y sanciona normas evidentemente inconstitucionales, salvo la relativa a represión de asociaciones ilícitas y que sería innócuas, desde que el delito está previsto y castigado en el artículo 210 del proyecto.

Las penalidades establecidas en la ley 7029 no tienen razón de ser, desde que los delitos por ella previstos están legislados en el proyecto en estudio, pudiendo considerarse equivalentes las siguientes disposiciones:

Ley núm. 7029

Proyecto de código

Art. 12	Art. 213
" 13	" 212
" 14	" 211
" 15	" 186
" 16	" 186 y 80
" 17	" 210
" 18	" 212 inc. 1.º
" 19	" 212 " 2.º
" 20	" 209
" 21	" 212 " 3.º
" 25	" 158
" 26	" 226

En cuanto a los artículos 22, 29, 30, 31 y 32, el honorable senado ha aceptado ya su supresión, no siendo, pues, preciso demostrar la inconstitucionalidad e inconveniencia de tales disposiciones.

XI

Artículos 41 bis y 51 bis

Mediante la agregación del artículo 41 bis se propone la adopción de los artículos 23 y 24 de la ley 7029, el primero de los cuales establece que cuando determinados delitos se cometan por medio de la prensa, se aplicará el máximo de la pena, lo que constituye una norma rígida que impediría al juez graduar la penalidad de acuerdo con las atenuantes o agravantes particulares a cada caso (art. 40), y haría predominar una circunstancia relativa al modo de ejecución del hecho sobre todos los demás elementos de juicio que el artículo 41 enumera y que sirven para conocer la mayor o menor peligrosidad del sujeto. En cuanto al artículo 24 de la ley 7029, que autoriza el secuestro del instrumento del delito, sería una inútil repetición del precepto general establecido en el artículo 23 del proyecto de código penal.

Mediante la adición del artículo 51 bis, se procura incorporar al código las disposiciones de los artículos 27 y 28 de la ley 7029. Las reglas generales establecidas en el artículo 52 del proyecto, sobre reincidencia, hacen innecesaria e inconveniente la aceptación del mencionado artículo 27. En cuanto al artículo 28, baste recordar que la inhabilitación, absoluta o relativa, y sobre la cual legislan los artículos 19 y 20 del proyecto, comprende la privación de los derechos polí-

ticos y que el retiro de la ciudadanía argentina no es una sanción aplicable con justicia al autor de delitos leves, como son los previstos en los artículos 158 y 218. ¿Es posible, acaso, retirar la ciudadanía al obrero que violenta a otro para que entre en la huelga, o al patrón que ejerce violencia sobre un obrero para obligarlo a ingresar a una sociedad patronal determinada?

XII

Artículo 225 bis

Entre los conceptos fundamentales que el código reconoce como base está la "determinación de la pena dentro de un minimum suficientemente amplio, para que el juez la fije con un criterio de justicia y de utilidad social". La penalidad establecida en el proyectado artículo 225 bis (3 a 6 años de penitenciaría) sería indudablemente contraria al expresado concepto.

De acuerdo con las orientaciones de la ciencia penal, el proyecto simplifica las penas privativas de la libertad, reduciéndolas a la reclusión y a la prisión. El artículo 225 bis, en cambio, pretende mantener la pena de penitenciaría, destruyendo la estructura del código.

Por último, cabe observar que el proyecto de código consagra la morigeración de la actual penalidad, mientras que la cláusula extraída de la ley 7029 impone, en este caso, una penalidad brutalmente excesiva.

La comisión especial de esta honorable cámara presidida por el ex-diputado doctor Rodolfo Moreno (hijo), al despachar el proyecto en 1917, decía las palabras siguientes: "Según los antecedentes recogidos, no se conocen casos de ofensa a la bandera o al estufo de la nación y no es conveniente suponer que esa clase de delitos puedan cometerse, porque eso ofendería al patriotismo de los hijos de este suelo. Mejor es dejar incólumes esos signos respetados por todos los habitantes del país".

Pero aun poniéndonos en la hipótesis de admitir la conveniencia de imponer sanciones represivas de esta clase de hechos, nos encontramos en la imposibilidad de graduar la pena, estableciendo cierta proporcionalidad y fijando un minimum amplio, de modo que, obligados a optar entre la inclusión o eliminación

de una cláusula que rígidamente impone tres a seis años de penitenciaría, nos decidimos sin vacilación por el segundo término del dilema. La severidad de semejante castigo podría ser de una injusticia irritante y ello constituiría una verdadera lesión a los sentimientos de un bien entendido nacionalismo. Rechazamos decididamente esta enmienda.

El artículo 226 reprime la rebelión e incluye en esta calificación "a los que se alzaren con armas para cambiar la constitución". Esta es la infracción punible, de acuerdo con nuestra tradición y con las enseñanzas de la ciencia penal. Además, el que públicamente instigue a cometer un delito determinado, será reprimido por la sola instigación con prisión de un mes a cuatro años (art. 209).

Basta lo expuesto para evidenciar la inconveniencia del agregado proyectado por la cámara revisora.

XIII

Artículo 158

Opinamos que la honorable cámara debe insistir en su anterior sanción, manteniendo el concepto de "violencia".

XIV

Revocación de la condena condicional

Los proyectos de Segovia (1895), Gouchon (1904), Arancibia Rodríguez (1912), Oliver (1912) y el del poder ejecutivo (1918), proponen como única causal de revocación de la condena condicional, la ejecución de un nuevo delito. El congreso de Budapest sostuvo la misma solución. El proyecto de 1906 (Beazley, Rivarola, Saavedra, etc.), establecía como causas de revocación de la condena condicional, la ejecución de un nuevo delito o el descubrimiento de malos antecedentes del condenado, pero la comisión especial de la cámara de diputados eliminó esta segunda circunstancia.

El agregado propuesto por el honorable senado al artículo 27, reconoce como única fuente las opiniones de dos magistrados, los doctores Seeber y Frías, quienes sostuvieron en la encuesta organizada por la comisión especial de la cámara de diputados, que la "mala con-

ducta" era causa de la revocación de la condena condicional.

El proyecto del ministro italiano Bonacci, agregaba a la ejecución de un nuevo delito "la conducta reprochable" del condenado, pero esta segunda causal no figura en los proyectos de Ciantureo y de Ronchetti, ni en la ley italiana del 26 de junio de 1904, ni en el código del 1.º de enero de 1914. Las leyes sobre condena condicional de Bélgica, Francia, Portugal, España, Noruega y Cantón de Vaud, establecen que solamente un nuevo delito es causal de revocación.

Dice el doctor Julio Herrera en "La Reforma Penal" que no es razonable retirarle el beneficio al condenado, mientras su mala conducta no haya llegado hasta la comisión de un delito. El fin principal de la condena condicional es evitar la reincidencia. La ley no puede pretender que cada condenado condicionalmente observe conducta impecable; debe bastar que no se convierta en profesional del delito. "Sólo un nuevo delito debe hacer revocar el beneficio y no meras contravenciones o simplemente "mala conducta" expresión esta última, de una vaguedad tal que autoriza todas las interpretaciones y que puede llegar hasta desnaturalizar el propósito de la ley y desprestigiarla, por la desigualdad de tratamiento que será su consecuencia ineludible". Esta es la tesis predominante en la doctrina.

Para que el condenado pueda ser privado del beneficio concedido es necesario que cometa un delito. Sólo este hecho puede suministrar un criterio cierto en una materia que, en lo posible, debe substraerse a apreciaciones extrínsecas que no siendo uniformes, crearían desigualdades entre los condenados. Por otra parte, la ley no hace distinción alguna entre delito doloso o culpable, ni respecto a la calidad de la pena, que puede ser pecuniaria o restrictiva de la libertad personal y de cualquier duración. (Ver Ravizza. "La condanna condizionale", pág. 272 y siguientes).

XV

Examen psiquiátrico

La comisión de códigos del honorable senado, consideró que de no admitirse de una manera general, el examen médico de los encausados, debía imponerse, por lo menos, en los casos en que pudiera corresponder reclusión o

prisión mayor de diez años, y aconsejó en consecuencia, la inclusión en el código penal, de una norma general sobre el examen clínico de determinados encausados, aplicable en todo el territorio de la república.

Vuestra comisión especial opina que la iniciativa está de acuerdo con las últimas conquistas de la psiquiatría y del derecho penal; pero, considera peligrosa la inclusión de una norma obligatoria para todo el territorio de la república, siendo preferible dejar a cada provincia la posibilidad de legislar sobre el punto en armonía con sus necesidades y recursos.

El congreso penitenciario argentino de 1914 votó esta conclusión: "Incluir en el código de procedimientos en lo criminal, como norma el examen psiquiátrico de todos los encausados en el período de instrucción, constituye un progreso en ciencia penal".

Aconsejamos en consecuencia la eliminación de la cláusula final agregada al artículo 41 del proyecto de código penal, y la sanción del proyecto de modificación del artículo 261 del código de procedimientos en lo criminal, que en la fecha presentamos.

XVI

Participación de impresores, etc.

Los motivos que fundamentaron el artículo 49 sirven para demostrar la inconveniencia del agregado que se proyecta. Ellos se encuentran consignados en la exposición de motivos del proyecto de 1891, que dice así:

"Hemos completado la legislación sobre la codelinquencia con un precepto que declara exentos de responsabilidad por los hechos punibles cometidos por la prensa, a los editores, impresores y demás personas que prestan al autor del escrito o grabado, la cooperación necesaria para su publicación. Este artículo deroga aparentemente el principio común en materia de codelinquencia, según el cual se presumen responsables a todos los que han cooperado a la realización de un delito, y se presume, porque se supone que todos han concurrido con intención de delinquir. A pesar de la apariencia, el artículo puede no ser, y no será a menudo una derogación del principio. El editor, los cajistas, etc., cooperan, es verdad, a realizar el hecho; pero lo ha-

"cen ordinariamente sin propósito criminal, sin el menor deseo de agravar derecho alguno, sin conocimiento de las trascendencia del escrito o grabado y del fin a que se encamina; lo hacen sólo para ejercer su industria o su modo de vivir. Sin embargo, aunque las personas nombradas prestan sus servicios con intención criminal y para que el hecho punible se cumpla, el artículo debe mantenerse, porque de la manera amplia como está redactado consagra una garantía de la libertad de imprenta. La constitución nacional ha desechado la censura previa; y sería restablecerla y restablecer la peor de las censuras — la de la ignorancia — responsabilizar a los editores, grabadores, copistas, etc., por los actos punibles cometidos mediante la prensa. En efecto, antes de imprimir cualquier trabajo, examinarán si es o no ofensivo; y si a su juicio fuera susceptible de comprometer su responsabilidad, se rehusarían a imprimirlo. El artículo se apoya en la doctrina y en la legislación comparada."

XVII

Cheques

Las enmiendas introducidas al artículo 302 no son aceptables. La fijación de la pena, con determinación del máximo y del mínimo, es preferible a la enunciación de la prisión "hasta un año", proyectada por el honorable senado. El resto del artículo es modificado solamente en su redacción, sin quitarle ni agregarle nada; pero la nueva redacción ofrece un inconveniente, pues hace mención, en plural, de la entrega de "cheques" o "giros", lo que pueda dar lugar a interpretaciones jurisprudenciales equivocadas, tratándose de una cuestión penal que es de interpretación restrictiva.

XVIII

Numeración del código

En los puntos *h* a *m* de nuestro despacho, aconsejamos el rechazo de las modificaciones que darían por resultado la alteración de la numeración de todo el código, o en otros términos, aceptamos las enmiendas, pero no

la distribución del articulado que equivocadamente se hace en la sanción del honorable senado. No se trata exclusivamente de la operación mecánica de numerar los artículos. El cambio total de la numeración del código, sería un grave error que destruiría la individualización de cada artículo y quitaría eficacia al valioso material acumulado en su confección, así como a las repetidas diferencias que la crítica ha hecho de todas y cada una de sus disposiciones.

La supresión de los artículos 4, 77 y 263, es reparable mediante la división en dos cláusulas del artículo más próximo a cada uno de ellos. Además ha sido necesario no admitir el cambio de ubicación del artículo 70, ni la división del artículo 52, ni la refundición de los artículos 104 y 105.

XIX

Excarcelación

La modificación de las penalidades y el establecimiento de la condena condicional, hace necesaria una reforma parcial del código de procedimientos penal. Al efecto, reproducimos los fundamentos del proyecto presentado el 9 de septiembre de 1920 por el señor diputado Parry sobre excarcelación bajo fianza, y acompañamos un proyecto de ley, aconsejándonos, honorable cámara, su sanción.

Sala de la comisión, septiembre 9 de 1921.

Roberto Parry. — C. M. Pradère. — D. del Valle. — Antonio de Tomaso. — L. Landaburu.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Está en discusión.

Sr. Parry. — Pido la palabra.

La comisión especial que estudia el proyecto de código penal había resuelto solicitar de la honorable cámara que este asunto fuera decidido mediante una votación a libro cerrado. Opinamos, señor presidente, que ésta es la única forma de tratar un código que es una obra armónica, de conjunto, donde es imposible la introducción fragmentaria de detalles.

La primer sanción del proyecto actual por esta cámara lo fué median-

te la sanción a libro cerrado y en el honorable senado se ha seguido el mismo procedimiento.

El proyecto ha sido minuciosamente estudiado e informado por escrito. En apoyo de nuestra petición nos place, señor presidente, invocar la alta autoridad del doctor Octavio González Roura, magistrado y profesor, que fue miembro del congreso penitenciario de 1914 quien ha intervenido en forma directa en la preparación de este proyecto de código haciendo escuchar su opinión en la comisión especial de legislación penal y carcelaria cuando se hizo la primera sanción y sobre todo en el honorable senado donde la planilla de modificaciones traduce muchas de las opiniones de este magistrado.

Y bien; seleccionadas las modificaciones introducidas por el honorable senado para aceptarlas en su mayoría, la comisión especial de esta honorable cámara, en la imposibilidad de aconsejar la aprobación de todas esas modificaciones, aconseja el rechazo de una parte de ellas.

El doctor González Roura nos manifiesta que se ha enterado del despacho y que lo aplaude sinceramente. Creo — dice — que el honorable senado no insistirá, pues queda lo que de la ley 7029 reviste verdadera importancia y no debo pensar que en lo referente a la pena de muerte desee colocarse a retaguardia de la cámara, pretendiendo mantener el alumbrado a petróleo en el siglo de la electricidad.

Es de esperar ahora que la cámara aprobará el despacho a libro cerrado. Ratificamos estas autorizadas manifestaciones y presentamos a la honorable cámara nuestra indicación de votación inmediata a libro cerrado del despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Los señores diputados resolverán si se va a hacer una sola votación, en cuyo caso se votará el despacho de la comisión...

Sr. Ortiz. — Yo votaría en una sola votación si se aceptan o no las modificaciones para salvar esta dificultad práctica y para que el código quede sancionado o vuelva de inmediato al

senado. Pero se entiende que si se discute el despacho ello ha de hacerse modificación por modificación, porque unos aceptarían y otros no las enmiendas del senado.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Si me permite el señor diputado...

Votar el despacho de la comisión significa aceptar unas y rechazar otras modificaciones del senado. Para los diputados que deseen aceptar todas las modificaciones del senado, sería el caso de rechazar el despacho o votar por partes. No hay otra forma de votación.

Sr. Ortiz. — Para abreviar yo propondría que se resuelva previamente si se aceptan o no las modificaciones del senado. En esta forma, si la votación de la cámara fuera afirmativa, el código penal quedaría sancionado inmediatamente. En caso contrario no.

Sr. Echagüe. — Tratándose de modificaciones concretas y a casos perfectamente determinados, no es procedente la argumentación que ha hecho el señor presidente de la comisión al pedir la votación a libro cerrado; no hago cuestión de esto, sino que lo enuncio para salvar el precedente; y con el objeto de que la discusión concluya, no me opongo a ninguno de los temperamentos propuestos.

Sr. Parry. — ¿Qué temperamento se propone?

Sr. Ortiz. — Que se vote si se aceptan o no las modificaciones del honorable senado. En ese caso si la sanción obtenida es por la afirmativa, el código penal queda sancionado.

Sr. de Tomaso. — La comisión, acepta, señor presidente, ese procedimiento.

Sr. Ferreyra. — Pido la palabra.

Voy a proponer un procedimiento que tal vez resuelva rápidamente las dificultades. En primer lugar propongo que la cámara vote la indicación formulada por el señor diputado Ortiz y en seguida la moción formulada por el señor diputado presidente de la comisión.

Sr. Parry. — Estamos de acuerdo.

Sr. Pinedo. — El despacho de la comisión aconseja aprobar algunas otras.

De manera que lo práctico es hacer una doble votación sobre el despacho; primero, en cuanto acepta modificaciones del senado, en lo cual sin duda habrá unanimidad; y en seguida en cuanto rechaza algunas enmiendas sobre las cuales podrán salvar su opinión los señores diputados que estén en contra del despacho.

Sr. Ortiz. — Sería reconsideración. Aceptar las enmiendas del senado importa dejar sancionado ya el proyecto.

Sr. de Tomaso. — La comisión acepta el procedimiento indicado por el señor diputado Ortiz, porque le parece más lógico y más rápido. Votaremos primero si la cámara quiere que esto se sancione a libro cerrado...

Varios señores diputados. — No es así.

Sr. de Tomaso. — Es así.

Luego, una vez resuelto el procedimiento, la cámara manifestará si acepta el despacho.

Sr. Ortiz. — Mi proposición es lo único que cabe frente a la disposición constitucional: la cámara debe manifestar si acepta o no las modificaciones del senado.

Sr. Sánchez de Bustamante. — Es lo reglamentario.

Sr. Presidente (Goyeneche). — La presidencia se permite indicar un procedimiento que cree conveniente.

Pueden hacerse las votaciones: en primer término, votar todas las observaciones formuladas por el honorable senado y que han sido aceptadas por la comisión...

Varios señores diputados. — Así es.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se van a votar si se aceptan todas las modificaciones introducidas por el honorable senado y que no han sido aceptadas por la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa general.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Prevece la resolución de la honorable cámara en los artículos observados por la comisión.

Sr. Parry. — Pido la palabra.

En la impresión de la orden del día se ha incurrido en algunos pequeños errores en la redacción del artículo 13 y omisiones en los artículos 25 y 82 y en la letra N. en los artículos 45, 52 y 109, que están en otra parte del mismo despacho.

Pido a la secretaría que tenga presentes esos errores a fin de hacer la comunicación al honorable senado.

Sr. Ferreyra. — Pido que se comunique inmediatamente al honorable senado esta sanción.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Habiendo asentimiento, así se hará.

7

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN LO CRIMINAL

(Orden del día número 183)

Sr. Ortiz. — Desearía saber si debe tratarse ahora la modificación al código de procedimientos en lo criminal.

Sr. Parry. — Sí, señor; forma la segunda parte del despacho.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Si no hay oposición de parte de los señores diputados, está en consideración.

Honorable cámara:

Vuestra comisión especial de legislación penal, por las razones expresadas en el adjunto informe, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º — Modifícase el artículo 386 del código de procedimientos en lo criminal, en la siguiente forma: La caución juratoria se admitirá, cuando concurren juntamente las siguientes circunstancias:

1.º Que la pena correspondiente al delito no exceda, en su máximo, de cuatro años de reclusión o prisión;